

REPÚBLICA DE COLOMBIA



SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL
Medellín, treinta y uno (31) de enero de dos mil veintitrés (2023)

DEMANDANTES	: LUIS CARLOS BETANCUR LÓPEZ, FABIO IGNACIO PATIÑO CORREA, EDUIN HERNANDO RESTREPO AREIZA, MANUEL SALVADOR QUINCHÍA DUQUE y CARLOS ENRIQUE RESTREPO BUSTAMANTE
DEMANDADOS	: MUNICIPIO DE TARAZÁ y COLPENSIONES
LITISCONSORCIO NECESARIO:	ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS COLFONDOS S.A. Y PORVENIR S.A.
TIPO DE PROCESO	: ORDINARIO
RADICADO NACIONAL	: 05-001-31-05-019-2019-00565-01
RADICADO INTERNO	: 296-22
DECISIÓN	: CONFIRMA SENTENCIA
ACTA NÚMERO	: 006

En la fecha, el TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL, se reunió para emitir sentencia de segunda instancia en la que se resuelve los recursos de apelación en el proceso de la referencia. La Sala, previa deliberación, adoptó el proyecto presentado por el ponente, Doctor HUGO ALEXANDER BEDOYA DÍAZ, que a continuación se traduce en la siguiente decisión:

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 de la ley 2213 del 13 de junio de 2022, la providencia en segunda instancia se profiere escrita.

En el certificado de inscripción de documentos de la Cámara de Comercio de Bogotá, reposa la inscripción de la Escritura Pública No. 584 de 2017 inscrita el 3 de abril de 2017, que fue modificada mediante escritura pública No. 832 de 2020 inscrita el 9 de julio de 2020, de la que reposa que el Dr. Juan Manuel Trujillo Sánchez (representante legal de COLFONDOS S.A. confirió poder general al Sr. John Walter Buitrago Peralta. Advirtiéndose que en dicho certificado no existe inscripción de revocatoria alguna a dicho poder. En consecuencia, se reconoce personería jurídica para representar los intereses de Colpensiones, por cumplir los requisitos establecidos en los artículos 75 del CGP se le reconoce personería (fls. 47 y 48 de los alegatos de conclusión).

ANTECEDENTES

La parte demandante, solicita se CONDENE a la Administración Municipal de Taraza a diligenciar el cálculo actuarial o expedir certificado de bono pensional por el tiempo de la vinculación laboral de los demandantes, sumado al tiempo reconocido en la sentencia transicional de Justicia y Paz de Medellín y sus complementarias.

Se CONDENE a Colpensiones a elaborar el cálculo actuarial y/o recibir y redimir el bono pensional que deba expedir la Administración Municipal de Taraza. Se condene en costas procesales.

Fundamenta sus pretensiones en que, los demandantes estuvieron vinculados a la Administración Municipal de Taraza, así:

- El Sr. Luis Carlos Betancur López desde el 1º de junio de 1992 al 19 de diciembre de 2001
- El Sr. Fabio Ignacio Patiño Correa desde el 2 de agosto de 1993 al 19 de diciembre de 2001
- El Sr. Eduin Hernando Restrepo Areiza desde el 28 de enero de 1998 al 19 de diciembre de 2001
- El Sr. Manuel Salvador Quinchía Duque desde el 27 de enero de 1986 al 19 de diciembre de 2001
- Y el Sr. Carlos Enrique Restrepo Bustamante desde el 1º de julio de 1992 al 31 de marzo de 2002

Durante el tiempo de la relación laboral, la Administración Municipal de Taraza no cumplió con su obligación de pagar los aportes al Sistema de Seguridad Social en Pensiones; al momento de la desvinculación, los señores Luis Carlos Betancur López, Fabio Ignacio Patiño Correa, Eduin Hernando Restrepo Areiza y Carlos Enrique Restrepo Bustamante, devengaban la suma de \$530.190, y el Sr. Manuel Salvador Quinchía Duque devengaba la suma de \$585.870.

Los demandantes fueron constreñidos por el postulado de Justicia y Paz, Sr. Ramiro Vanoy Murillo (a) Cuco Vanoy, cabecilla del Bloque Minero de la AUC, para renunciar a los cargos que ostentaban en la Administración Municipal de Taraza y aceptar las condiciones de retiro que le imponían el Alcalde del periodo 2001-2003; dicho constreñimiento, los hizo el Sr. Ramiro Vanoy Murillo (a) Cuco Vanoy a petición del Alcalde.

El Sr. Ramiro Vanoy Murillo (a) Cuco Vanoy, en versión libre rendida en Miami el 16 de abril de 2008, cuando se acogió al trámite transaccional de justicia y

paz, reconoció como víctima de sus acciones a los integrantes del Sindicato de Trabajadores Oficiales y empleados Públicos de los Municipios del Departamento de Antioquia – SINTRAOFAN -Tarazá, para que renunciaran a sus cargos y se abstuvieran de ejercer toda acción legal o judicial contra la Administración Municipal de Taraza en cabeza del Alcalde Miguel Ángel Gómez García. La Fiscalía 15 delegada de Medellín, para la Unidad de Justicia y Paz, decretó la apertura de una investigación previa, para establecer la veracidad de las auto imputaciones que hiciera el Sr. Ramiro Vanoy Murillo (a) Cuco Vanoy respecto de los sindicalizados SINTRAOFAN – Tarazá.

En audiencia preliminar de imputación de cargos, realizada el 20 de mayo de 2009 ante el Tribunal Superior de Medellín con funciones de control de garantías, la Fiscalía 15 delegada de Justicia y Paz, imputó cargos y solicitó medida de aseguramiento del Sr. Ramiro Vanoy Murillo (a) Cuco Vanoy por lo punibles de constreñimiento ilegal y violación de los derechos de asociación, cometidos contra los integrantes de SINTRAOFAN – Tarazá; en dicha audiencia de imputación de cargos, el Sr. Ramiro Vanoy Murillo (a) Cuco Vanoy confirmó su confesión y aceptó los cargos de victimización a los demandantes integrantes de SINTRAOFAN – Tarazá; en dicha diligencia, se reconocen a los demandantes como víctimas de los delitos del Sr. Ramiro Vanoy Murillo (a) Cuco Vanoy. Se presentó incidente de reparación integral y el Tribunal Superior de Medellín profirió sentencia transicional de primera instancia el 2 de febrero de 2015, en donde se condenó al Sr. Ramiro Vanoy Murillo (a) Cuco Vanoy al resarcimiento material de los perjuicios laborales causados a los sindicalizados – victimizados, hoy demandantes.

La sentencia fue recurrida por abogados representantes de otras víctimas de Justicia y Paz, y en sentencia con radicado 46.061 del 4 de mayo de 2016, la Corte Suprema de Justicia recomendó la adecuación del fallo con respecto a los apelantes y quedando en firme lo resuelto a favor de los hoy demandantes.

El 16 de junio de 2017, el Tribunal Superior de Medellín, procedió a dictar sentencia complementaria de la proferida el 2 de febrero de 2015 dentro de la actuación seguida contra el Sr. Ramiro Vanoy Murillo (a) Cuco Vanoy, en cumplimiento de lo ordenado por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia del 4 de mayo de 2016, ello es, reexaminar lo relacionado con el incidente de reparación integral. En sentencia del 16 de junio de 2017, fue complementada, a través de las providencias del 27 de julio y 4 de agosto de 2017. En la sentencia complementaria, a pesar de haber

declarado el despido ilegal o injusto y ordenar como resarcimiento el pago de los salarios, prestaciones legales y convencionales, deja en claro que en lo referente a los cálculos actuariales o al pago de las pensiones de las víctimas, era menester acudir a la justicia ordinaria laboral o administrativa según las calidades de los empleados, ello en la sentencia complementaria del 16 de junio de 2017.

En la sentencia del 2 de febrero de 2015 se abstuvo de pronunciarse sobre la Administración Municipal de Taraza por cuanto en un proceso en el que las víctimas carecieron de las garantías procesales de acceso a la justicia, se absolvió al ex Alcalde Miguel Ángel Gómez García.

Los demandantes solicitaron a la Administración Municipal de Taraza, el reconocimiento de la pensión de jubilación o la gestión del cálculo actuarial o la expedición de bono pensional; ante el silencio administrativo por parte de la Administración Municipal de Taraza, se citó a audiencia de conciliación ante la Procuraduría Administrativa de Medellín y citación a Colpensiones; la audiencia de conciliación se llevó a cabo el 24 de septiembre de 2018, en donde la Administración Municipal de Taraza manifestó su decisión de no conciliar. El 30 de agosto de 2019, se solicitó a Colpensiones, ordenara la elaboración del cálculo actuarial de los aportes a pensión y una vez realizado, presentara la cuenta de cobro a la Administración Municipal de Taraza, de conformidad con los cuados elaborados y anexos a la sentencia transicional del 16 de junio de 2017 y sentencias complementarias.

RESPUESTAS A LA DEMANDA

Colpensiones y en la contestación de la demanda indica que no le constan los hechos de la demanda. Y se opuso a las pretensiones de la demanda (fls. 459 a 465 expediente digital 01).

En auto del 17 de enero de 2020 se dio por no contestada la demanda por parte del Municipio de Taraza y se tuvo como indicio grave la no contestación de conformidad con el parágrafo 2º del art 31 del CPT y SS modificado por el art. 18 de la Ley 712 de 2001 (fls. 482 y 483 del expediente digital 01)

En audiencia de conciliación, decisión de excepciones previas, saneamiento, fijación del litigio y decreto de prueba llevada a cabo el 19 de octubre de 2021,

el Juzgado de conocimiento consideró necesario vincular a Colfondos S.A. y Porvenir S.A. en calidad de litisconsorcio (fl. 2 del expediente digital 09).

En la contestación de la demanda, Colfondos S.A. señala que no le constan los hechos de la demanda y se opuso a las pretensiones de la demanda (expediente digital 17).

Por su parte, **Porvenir S.A. indicó en su contestación** se opone al reconocimiento en costas solicitado, pero no presenta oposición ni se allana a las demás pretensiones de la demanda. En relación a los hechos de la demanda, manifiesta que no le consta, pero informa que:

- el Sr. Luis Carlos Betancur López, solicitó traslado de Colpensiones hacia Horizonte S.A el 26 de enero de 1998, posteriormente solicito traslado a Colfondos, razón por la que los dineros de la cuenta de ahorro individual se trasladaron a dicha entidad, y actualmente el saldo de la cuenta de ahorro individual en Porvenir S.A es cero; en la historia laboral de este demandante, registran cotizaciones realizadas por la demandada en abril y mayo de 1998 reportando un IBC de \$220.000, en junio de 1998 un IBC de \$147.662, julio a diciembre de 1998 un IBC de \$220.000 y de enero a octubre de 1999 se reportó un IBC de \$236.460.
- El Sr Fabio Ignacio Patiño Correa, no registra afiliación con Porvenir S.A.
- El Sr Eduin Hernando Restrepo Areiza, solicitó su vinculación a Colpatria el 9 de junio de 1998, efectiva a partir del 10 de junio, y por la figura de cesión por fusión, el demandante se encuentra válidamente afiliado a Porvenir S.A el 1º de enero de 2014; En la historia laboral del demandante, no se registran cotizaciones por parte del Municipio de Taraza en su favor;
- El Sr. Manuel Salvador Quinchia Duque, solicitó traslado de Colpensiones a Colpatria el 1º de julio de 1996, hasta el 31 de octubre del 2000 cuando solicitó su traslado a Colpensiones; en la historia laboral, se registran cotizaciones hechas por la entidad demandada, solo en el mes de septiembre de 1996, reportando un IBC de \$220.830;
- El Sr. Carlos Enrique Restrepo Bustamante, no registra afiliación con Porvenir S.A. (expediente digital 18).

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Mediante sentencia del 29 de septiembre de 2022, el Juzgado Diecinueve Laboral del Circuito de Medellín, CONDENÓ al Municipio de Taraza, que frente al tiempo de servicio prestado por los demandantes Luis Carlos Betancur López, Fabio Ignacio Patiño Correa, Manuel Salvador Quinchua Duque y Carlos Enrique Restrepo Bustamante hasta el 30 de junio de 1995, si no lo hubiere hecho, proceda a garantizar mediante el trámite administrativo correspondiente, los recursos tendientes a validar los periodos laborados para el momento en que se haga exigible el reconocimiento de prestación dentro del sistema de pensiones, incluyendo la información correspondiente en el sistema de Certificación Electrónica de Tiempos Laborados-Cetil.

Condenó al Municipio de Taraza a reconocer a favor de los demandantes Luis Carlos Betancur López, Fabio Ignacio Patiño Correa, Eduin Hernando Restrepo Areiza, Manuel Salvador Quinchua Duque y Carlos Enrique Restrepo Bustamante y con destino a Colpensiones, respecto de los señores Patiño Correa y Quinchua Duque, Colfondos S.A. con relación a los señores Betancur López y Restrepo Bustamante y Porvenir S.A. frente al Sr. Restrepo Areiza, título pensional por el periodo comprendido entre el 1° de julio de 1995 y el 30 de marzo de 2017, salvo frente al Sr. Eduin Hernando Restrepo Areiza cuyo hito inicial se fija en el 28 de enero de 1998, teniendo en cuenta para ello como salario base el señalado en sentencia dictada por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín el 16 de junio de 2017 bajo concepto 3°, sin que se incluyan ciclos en los cuales les figuren aportes durante dicho periodo por parte del ente territorial, ante la imposibilidad de ordenar el pago doble de un mismo concepto.

CONDENÓ a Colpensiones, Porvenir S.A. y Colfondos S.A., a realizar el cálculo actuarial correspondiente a título pensional, frente a los periodos indicados en el numeral anterior, durante los cuales los demandantes mantuvieron un vínculo con el Municipio de Taraza, con el fin de que este último proceda a cancelar los dineros correspondientes; condenó a dichas entidades a que reciban de parte del Municipio de Taraza, el valor correspondiente a los títulos pensionales. Condenó en costas al Municipio de Taraza y en favor de los demandantes.

El presente asunto se conocerá en el grado jurisdiccional de consulta a favor del Municipio de Taraza.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

La AFP Colfondos S.A. solicita sea declarada la prosperidad de las excepciones propuestas y se absuelva a dicha entidad de las pretensiones de la demanda aduciendo el desconocimiento de las circunstancias en que se efectuó la contratación con el ente territorial y las demás circunstancias relativas a la situación contractual; señala que no existe legitimación en la causa por pasiva ni causa legal para proferir condena en contra de Colfondos S.A..

Como sustento de su solicitud, invoca el art. 22 de la Ley 100 de 1993 que hace referencia a la obligación del empleador de realizar los aportes al sistema de seguridad social en pensiones, concluyendo que no le corresponden a Colfondos S.A acreditar el cumplimiento de dicha obligación legal, sino que el único obligado es el Municipio de Tarazá.

Y frente a la falta de legitimación en la causa por pasiva, considera que no existe sustento factico ni jurídico que permita establecer sobre Colfondos S.A, una responsabilidad de las pretensiones de la demanda, siendo la única responsable el Municipio de Tarazá por ser quien tuvo un vínculo laboral con los demandantes y la obligación que llegará a imponerse a la entidad que se vincula como empleadora de los demandantes, relacionada con el Sistema General de Pensiones, deberá cumplirse conforme lo señalado en la resolución 545 de 2020, liquidando la planilla tipo J, indicando si se trata de pago de aportes por: Reintegro, contrato de trabajo o Reliquidaciones.

La sociedad Porvenir S.A. solicita que la sentencia de primera instancia sea confirmada, aduciendo que son obligaciones de hacer impuestas por la ley a las AFP, y son generadas por el incumplimiento de las obligaciones del empleador en favor de los afiliados al sistema pensional, las cuales se incumplieron por el Municipio de Tarazá, y al encontrarse probados los presupuestos legales para declararse que entre los demandantes y la demandada existió una relación laboral regida por un contrato de trabajo, así como los factores salariales. Que la entidad Porvenir S.A,. acepta recibir a satisfacción el reajuste sobre los aportes pensionales de parte de la demandada, conforme a los cálculos actuariales que liquide y emita la AFP, los cuales deberán ser pagados por la demandada en el término que se disponga para el pago del mismo. Y solicita que se mantenga la absolución de Porvenir S.A. por las costas procesales.

El apoderado de la parte demandante indicó que, siguiendo las normas del debido proceso, se llamó a los fondos de pensiones, que debían integrar el Litis Consorte Necesario, por lo cual se vincularon al proceso los Fondos de Pensiones ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES, PORVENIR S.A. y COLFONDOS S.A., saneando la posibilidad de incurrir en Vulneración al Debido Proceso; por lo que se considera que no existió vicio de nulidad a subsanar. Por otro lado, se considera que está plenamente probado, que la administración municipal de Taraza, Antioquia, se abstuvo de pronunciarse, con respecto a la demanda y, a través de apoderado judicial, manifiesta que no tenía ánimo de conciliación y, el Juez en primera instancia, al dictar la sentencia, con presencia del apoderado de la administración municipal de Taraza, No mostro inconformidad con dicha providencia.

Conforme al acervo probatorio, está definido que los demandantes fueron irregularmente afiliados a las diferentes Administradoras de Pensiones y, que la administración municipal de Taraza, no cumplió con su deber de pagar los aportes y realizó el pago para cada trabajador de (4 a 5) semanas, en diferentes casos. Situación que ocasiono la reacción de las Administradoras de Pensiones, a reconocer la futura obligación de reconocer la eventual Pensión de Vejez, condicionando está a la elaboración del Calculo Actuarial o, expedición la del Bono Pensional, lo que ocasiono el proceso que nos ocupa, con el pronunciamiento hecho por el honorable Juez de primera Instancia.

Por lo tanto, se considera que se ha cumplido con los presupuestos procesales, del debido proceso.

Así, las cosas, se solicita por la parte actora, que CONFIRME la sentencia de primera instancia, en el grado de consulta.

CONSIDERACIONES

El problema jurídico en esta instancia se centrará en determinar en el grado jurisdiccional de consulta a favor del Municipio de Taraza: i) Si hay lugar condenar a dicho ente territorial, a que proceda a garantizar mediante el trámite administrativo correspondiente, los recursos tendientes a validar los periodos laborados para el momento en que se haga exigible el reconocimiento de prestación dentro del sistema de pensiones, frente al tiempo de servicio prestado por los demandantes Luis Carlos Betancur López,

Fabio Ignacio Patiño Correa, Manuel Salvador Quinchua Duque y Carlos Enrique Restrepo Bustamante hasta el 30 de junio de 1995, si no lo hubiere hecho, incluyendo la información correspondiente en el sistema de Certificación Electrónica de Tiempos Laborados-Cetil; ii) Si hay lugar a condenar al Municipio de Taraza a reconocer a favor de los demandantes, título pensional por el periodo comprendido entre el 1° de julio de 1995 y el 30 de marzo de 2017, y al Sr. Eduin Hernando Restrepo Areiza desde el 28 de enero de 1998, teniendo en cuenta como salario base el señalado en sentencia dictada por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín el 16 de junio de 2017 bajo concepto 3°.

Pues bien, una vez analizada la prueba allegada al plenario, la decisión de primera instancia se CONFIRMARÁ en su integridad, al obrar en el plenario las siguientes pruebas:

- Certificado laboral emitido por el Municipio de Taraza en donde constan los extremos de la relación laboral entre los demandantes y el Municipio de Taraza, de los que se extrae que (fls. 50 a 54 del expediente laboral 01):

- El Sr. Luis Carlos Betancur López laboró en calidad de obrero municipal del 1° de junio de 1992 al 19 de diciembre de 2001;
- El Sr. Fabio Ignacio Patiño Correa desde el 2 de agosto de 1993 al 19 de diciembre de 2001;
- El Sr. Eduin Hernando Restrepo Areiza desde el 28 de enero de 1998 al 19 de diciembre de 2001;
- El Sr. Carlos Enrique Restrepo Bustamante desde el 1° de julio de 1992 al 19 de diciembre de 2001;
- y el Sr. Manuel Salvador Quinchía Duque desde el 27 de enero de 1986 al 31 de marzo de 2002.

- Listado del personal del sindicato SINTRAOFAN subtaraza del año 2001, dentro de los cuales están relacionados los hoy demandantes (fl. 69)

- Respuesta a derecho de petición emitida la Fiscal 70 Especializada de apoyo de la Fiscalía 15 delegada UNJYP se informa que los hoy demandantes, excepto el Sr. Eduin Hernando Restrepo Areiza, fueron reconocidos como víctimas de la Ley de Justicia y Paz mediante orden del Fiscal, en fecha del 13 de enero de 2009. Que, tanto en diligencia de versión libre como en la audiencia de imputación, el Sr. Ramiro Vanoy Murillo confesó y aceptó su

participación en el hecho que victimizó a los integrantes del sindicato SINTRAOFAN, por violación a la libertad de trabajo (fls. 55 a 56).

- Oficios emitidos por la Fiscal 15 Delegada, donde informa a los señores Luis Carlos Betancur López, Fabio Ignacio Patiño Correa, y Carlos Enrique Restrepo Bustamante, el reconocimiento sumario de víctima de Justicia y Paz (fls. 57 a 60)

- Sentencia del Tribunal Superior de Medellín – Sala de Justicia y Paz, del 2 de febrero de 2015: En el cargo 20, relativo a las amenazas y violación a los derechos de reunión y asociación, se plasman como víctimas directas del Sr. Ramiro Vanoy Murillo (a) Cuco Vanoy a los hoy demandantes y en dicho cargo se narró:

“En la campaña para la Alcaldía del municipio de Tarazá en el año 2001, el candidato MIGUEL ÁNGEL GÓMEZ GARCÍA, en diferentes reuniones manifestó abiertamente que si quedaba como Alcaide terminaría con el sindicato de trabajadores del municipio de Tarazá - SINTRAOFAN - el cual ocasionaba demasiados gastos y sus miembros era considerados personas perezosas y poco útiles al municipio por su fuero sindical, y todas las prerrogativas económicas de ayudas y primas extras que habían adquirido a través de las diferentes convenciones colectivas que suscribían con los alcaldes de turno. Una vez electo el señor MIGUEL ÁNGEL GÓMEZ GARCÍA para el periodo constitucional 2001 al 2003, posesión que se protocolizó mediante escritura número uno del 1 de enero de 2001, como Alcalde del municipio de Tarazá - Antioquia, y amparado en la Ley 617 de 2000, artículo 79, que otorgaba facultades a los alcaldes para realizar reestructuraciones administrativas, fusionar y suprimir cargos y propender por las finanzas de los municipios como una racionalización del gasto público y valiéndose además, de los miembros de las "Autodefensas", especialmente de su máximo comandante RAMIRO VANOY MURILLO, alias "Cuco Vanoy", dispuso que los empleados del municipio afiliados al sindicato, SINTRAOFAN asistieran a varias reuniones, la primera en el mes de febrero de 2001 en la finca "El Atajadero" ubicada en la vía Tarazá - La Caucana, la segunda en abril de ese mismo año en la hacienda La Moneda, propiedad de RAMIRO VANOY MURILLO, alias "Cuco Vanoy", el cual rodeado de hombres armados y uniformados que conformaban su esquema de seguridad, les pidió que conciliaran las diferencias que existían entre el sindicato y la Alcaldía. Posteriormente se realizaron otras reuniones el 12 de septiembre del 2001, y en diciembre de ese mismo año en la finca La Moneda, y en el mes de mayo del año 2002, en la finca El Porvenir, ubicada en el municipio de Cáceres- Antioquia.

El 12 de septiembre del año 2001, los empleados del municipio de Tarazá agremiados en el sindicato SINTRAOFAN, fueron llevados por alias "Pepe" y DAIRO ZABALA, integrantes de la Bloque Mineros, en dos busetas de servicio público, a la finca La Moneda, la cual estaba custodiada por personal fuertemente armado de las "Autodefensas"; fueron atendidos personalmente por RAMIRO VANOY MORILLO, en presencia del Alcalde de Tarazá, MIGUEL ÁNGEL GÓMEZ GARCÍA, y

de otros miembros del gabinete municipal de Tarazá, entre ellos BOBY BEDOYA, Secretario General de la Alcaldía; JHON FREDY MORALES, Párroco de Tarazá; y DIGNA TUIRAN HOYOS, Personera Municipal. Una vez reunidos, RAMIRO VANOY MURILLO tomó la palabra y manifestó que habían sido llamados por petición del Alcalde MIGUEL ÁNGEL, por cuanto este no estaba de acuerdo con el Sindicato dado que estaban desangrando el municipio, tenían cantidad de prerrogativas y muchos de ellos no desempeñaban sus funciones a cabalidad, pues se valían de su fuero sindical para no hacer nada.

Igualmente les manifestó que aunque él no estaba de acuerdo con que fueran despedidos era decisión del Alcalde MIGUEL ÁNGEL quien los liquidaría e indemnizaría correctamente pagando hasta el último peso que les perteneciera. Luego de ello intervino el señor MIGUEL ÁNGEL GÓMEZ GARCIA, Alcalde de Tarazá, y manifestó que él asumiría las consecuencias de dicha decisión, por lo que otro miembro de las AUC conocido con el alias de Cuellar, manifestó a los presentes que debían renunciar a sus cargos para evitar "dolencias en el cuerpo, pues una bala arde mucho", después de lo cual los dejaron subir nuevamente a los buses y fueron trasladados hasta la cabecera del municipio de Tarazá. Posteriormente a esta reunión, el diecinueve de septiembre de 2001 se presentó otro nuevo encuentro en la finca La Moneda, propiedad de RAMIRO VANOY MURILLO, allí nuevamente les fue indicado que debían renunciar al Sindicato y a sus puestos en el municipio de Tarazá por lo que extendieron un acta de compromiso firmada por el Alcalde y varios empleados del municipio que asistieron a la reunión a través de la cual aquél se comprometía a pagar toda la deuda laboral de cada uno de los que fueran despedidos o que negociaran con su respectiva indemnización, previo préstamo que realizaría al IDEA- Instituto para el Desarrollo de Antioquia- para tal fin, luego de lo cual el Alcalde MIGUEL ÁNGEL GÓMEZ GARCÍA se presentó en la sede del Sindicato SINTRAOFAN en Tarazá y anunció que tenía dos noticias, una mala y una buena, la primera es que se liquidaba el Sindicato y la segunda que había conseguido un préstamo para sufragar los salarios y prestaciones sociales adeudadas. A cada uno de los integrantes del sindicato lo notificaron de su renuncia al cargo e igualmente le comunicaron la resolución por medio de la cual se disponía a liquidarlos, la suma a pagar de acuerdo al tiempo laborado y el monto de la indemnización. En vista de lo anterior, la gran mayoría firmaron la resolución ante la presión que generaba el grupo de "Autodefensas" en el municipio, por lo que después de aquel encuentro fueron despedidos de sus cargos. (...)"

En la parte motiva de la sentencia se determinó:

**“REPRESENTADAS POR EL ABOGADO RICARDO ARIEL HENRY
VEGA -TARAZÁ – ANTIOQUIA, APODERADO DE INTEGRANTES
DE
SINTRAOFAN.**

PRETENSIONES GENERALES

- 1. Reintegro al municipio, reconocimiento y pago de salarios dejados de percibir**
- 2. Liquidaciones correctas de acuerdo a los valores legalmente procedentes**
- 3. Que el postulado ofrezca disculpas públicas, diario de alta circulación.**

4. *Compromiso de no volver a cometer conductas punibles.*
5. *Tribunal deberá Almacenar archivos de hechos para garantizar derecho a la verdad*
6. *Debe garantizarse la no repetición*

Se procedió a liquidar los salarios y prestaciones sociales que tenían derecho según la convención colectiva como son las Primas de junio y diciembre, Prima de Vida Cara, Prima de Antigüedad, Vacaciones, Prima de Vacaciones, Cesantías e Intereses a las Cesantías que dejaron de percibir los trabajadores que estaban afiliados a SINTRAOFAN como consecuencia del despido que fueron objeto por parte del municipio de Tarazá, la liquidación se realizó desde el momento del despido hasta diciembre 31 de 2014 con la respectiva indexación, a los siguientes trabajadores:

1. (...)
3. *CARLOS ENRIQUE RESTREPO BUSTAMANTE, le corresponde un valor de \$296'041.470,27*
4. *EDUIN HERNANDO RESTREPO AREIZA, le corresponde un valor de \$138'878.545,44*
5. *FABIO IGNACIO PATIÑO CORREA, le corresponde un valor de \$298'240.224,62*
- (...)
20. *LUIS CARLOS BETANCUR LÓPEZ, le corresponde un valor de \$292.757.934,78*
- (...)
22. *MANUEL SALVADOR QUINCHÍA DUQUE, le corresponde un valor de \$265.146.562,6*

(...)

RESUELVE:

(...)

Noveno. DECLARAR la acreditación de condición de víctimas de quienes conforme a lo motivado, soportaron tal calidad.

Décimo. DECLARAR la acreditación de las afectaciones que vienen reconocidas en las motivaciones de esta sentencia.

Décimo primero. CONDENAR al postulado RAMIRO VANOY MURILLO, al pago de los perjuicios materiales e inmateriales ocasionados con los delitos objeto de esta sentencia, de acuerdo con los montos establecidos en la parte motiva.

Décimo segundo. LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS -UARIV CANCELARÁ las Indemnizaciones comprendidas en el esquema de reparación administrativa de su competencia, atendiendo los gravísimos impactos y perjuicios causados por los delitos objeto de la presente sentencia.” (fls. 2422 a 2425 y 2510 del expediente digital 02).

- La Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Penal, en sentencia emitida el 4 de mayo de 2016, declaró improcedente la nulidad solicitada por el Ministerio Público y la abogada Gloria Inés Ramírez Osorio respecto de la sentencia complementaria. Así mismo la señalada por la procuradora respecto

de la conciliación. Revocó el literal j) del art. 4º del fallo y en consecuencia, legalizar la circunstancia calificante del hurto del numeral 1º del art. 350 del Decreto Ley 100 de 1980 respecto del cargo 26 relacionado con la “Masacre de El Aro”, por lo que condenó al Sr. Ramiro Vanoy Murillo, en las condiciones expuestas. Declaró la nulidad parcial del fallo exclusivamente frente a la decisión del incidente de reparación integral, a efectos de que el Tribunal reexamine las pretensiones resarcitorias oportunamente formuladas y resuelva la solicitud de reparación del daño, en consecuencia, revocó los numerales 9 a 14, 19 a 29, 31,38 y 41 a 44 de la parte resolutive, referidos al trámite incidental. Y confirmó en todo lo demás el fallo de primera instancia (fls. 236 a 291 del expediente digital 01 y expediente digital 04)

- Sentencia complementaria emitida por el Tribunal Superior de Medellín Sala de Justicia y Paz el 16 de junio de 2017 se determinó (fls. 4.289 a 4.318 del expediente digital 05):

*“Respuesta de la Sala a las solicitudes referentes a **asuntos laborales** y conexos:*

*Si bien dentro de este acápite se entrarán a resolver las solicitudes puntuales para cada una de las víctimas representadas por el abogado Ricardo Ariel Henry Vega, se tiene en principio que se efectúan pretensiones alrededor **del tema laboral** de las cuales necesariamente habrá efectuarse un pronunciamiento.*

- 1. Solicitud de vinculación del municipio de Tarazá como tercero civilmente responsable: (...)*
- 2. Solicitud de reintegro de las víctimas a sus cargos en el municipio de Tarazá.*

La Sala no accederá a lo pretendido por el apoderado de las víctimas del Sindicato de Trabajadores Oficiales de Antioquia – SINTRAOFAN – Seccional Tarazá, en tanto se tiene probado que entre cada una de sus representados y el Municipio existió una relación laboral contractual en la que va envuelta la condición resolutoria por incumplimiento de lo pactado, con indemnización de perjuicios que comprende lucro cesante y daño emergente, lo que será liquidado en esta decisión.

- 3. Solicitud de reconocimiento y pago de prestaciones sociales en salud y pensión.*

Tiene en cuenta la Sala el impedimento legal de realizar afiliaciones retroactivas al sistema de seguridad social, sin embargo en cuanto a pensión de vejez cabe la posibilidad de la convalidación de los periodos no cotizados de acuerdo a los cálculos actuariales correspondientes de cada A.F.P., lo que, atendiendo a la imprescriptibilidad que se predica respecto de los derechos a la Seguridad Social y a un trámite que implica la vinculación de las administradoras, pone en una posición de mayores garantías a las víctimas de hacer esta reclamación ante la jurisdicción ordinaria, razón por la cual esta pretensión no se liquidará.

4. *Solicitud de reconocimiento y pago de salarios dejados de percibir.*
5. *Solicitud de reexamen de las liquidaciones mal efectuadas de acuerdo a los valores legalmente procedentes.*
6. *Solicitud de indemnización por daño emergente.*
7. *Solicitud de indemnización por daño moral.*
8. *Solicitud de indemnización por daño psicológico.*
9. *Solicitud de indemnización por daño a la vida de relación.*

*Las anteriores solicitudes se resolverán de acuerdo a las situaciones particulares de cada una de las víctimas bajo la siguiente metodología: Se procedió a liquidar los salarios y prestaciones sociales a que tenían derecho según la convención colectiva como son las Primas de junio y diciembre, Prima de Vida Cara, Prima de Antigüedad, Vacaciones, Prima de Vacaciones, Cesantías e Intereses a las Cesantías que dejaron de percibir los trabajadores que estaban afiliados a SINTRAOFAN **como consecuencia del despido que fueron objeto por parte del municipio de Tarazá, la liquidación se realizó desde el momento del despido hasta marzo de 2017** con la respectiva indexación utilizando las fórmulas laborales generalmente aceptadas. (...)*” (Resalto de la Sala)

En la sentencia en mención, igualmente reposan las liquidaciones realizadas por el Tribunal Superior de Medellín Sala de Justicia y Paz de los conceptos laborales que se debían reconocer a los demandantes por el periodo transcurrido desde el **despido hasta el 30 de marzo de 2017** (fls. 4.294 a 4.318 del expediente digital 05).

Teniendo claro lo anterior, se considera que le asiste razón al A Quo al condenar al Municipio de Tarazá a garantizarle a los señores Luis Carlos Betancur López, Fabio Ignacio Patiño Correa, Manuel Salvador Quinchua Duque y Carlos Enrique Restrepo Bustamante el tiempo de servicio por ellos laborado hasta el 30 de junio de 1995 (fecha en que entró en vigencia la Ley 100 de 1993 en el sector público), toda vez que se encuentra acreditado en el plenario que los demandantes laboraron para el ente territorial con anterioridad a la vigencia de la Ley 100, y en dicha oportunidad los empleadores no tenían la obligación de realizar cotizaciones al ISS, siendo solo, con la creación de la Ley 100 de 1993 que se impuso dicha obligación y se otorgó un término de afiliación hasta el 30 de junio de 1995.

En ese sentido, ante la inexistencia de obligación de realizar afiliación y cotizaciones por falta de cobertura, la posición de la Corte Suprema de Justicia, ha sido la de considerar, que el empleador debía presentar un provisionamiento para ser cancelado al Sistema General de Pensiones una vez asumiera la obligación, lo cual se extrae de la sentencia SL 2263 de 2022, que indicó:

“Así pues, el criterio que se viene exponiendo es el que marca el derrotero a seguirse actualmente (CSJ SL313-2022, entre muchas otras), en lo que se refiere a la interpretación y aplicación de las normas relativas al tema contenidas en la Ley 90 de 1946 y los reglamentos posteriores expedidos por el extinto Instituto de Seguros Sociales, tal como se recordó, también, en la sentencia CSJ SL2879-2020:

*La jurisprudencia de esta Sala, de manera reiterada y pacífica ha adoctrinado que **el empleador que no afilie a su trabajador al sistema de seguridad social, incluso debido a la falta de cobertura del ISS debe responder por las obligaciones pensionales frente a sus trabajadores** (CSJ SL5790-2014, CSJ SL4072-2017 y SL14215-2017), máxime cuando se trata de períodos en que aquellas estaban a su cargo (CSJ SL17300-2014, CSJ SL4072-2017, CSJ SL10122-2017, CSJ SL5541-2018 y CSJ SL3547-2018) y, por tanto, **deben asumir el título pensional correspondiente a efectos del reconocimiento de la pensión de vejez** (CSJ SL9856-2014, CSJ SL173002014, SJ SL14388-2015, CSJ SL10122-2017, CSJ SL15511-2017, CSJ SL068-2018, CSJ SL1356-2019, CSJ SL1342-2019 y CSJ SL1140-2020).*

*Ello es así, porque el pago del mencionado título a la entidad de seguridad social a la cual se encuentra afiliado el trabajador, tiene por finalidad cubrir esos períodos no cotizados e integrar el capital que se requiere para el reconocimiento de la prestación de vejez, es decir, **su único objetivo es que se perfeccione la subrogación de un riesgo que anteriormente asumía el empleador.** [...]” (Negrilla fuera del texto)*

Y en la misma orientación, se dirigen las sentencias SL 4072 de 2017, SL 5541 de 2018, SL 1356 y SL 1342 de 2019, SL 1140 de 2020 y SL 4921 de 2021, en donde se señala que los empleadores que no realicen la afiliación al sistema de seguridad social, aún por falta de cobertura del ISS, son los responsables de asumir las obligaciones pensionales de los trabajadores. Posición que según se indica la sentencia SL 4921 de 2021, viene siendo asumida desde el año 2014, siendo el inicio de dicha perspectiva la sentencia SL 9856 de 2014.

En consecuencia, se CONFIRMARÁ la sentencia de primera instancia, en este punto en concreto.

En relación a la condena impuesta al Municipio de Taraza a “reconocer a favor de los demandantes LUIS CARLOS BETANCUR LÓPEZ, FABIO IGNACIO PATIÑO CORREA, EDUIN HERNANDO RESTREPO AREIZA, MANUEL SALVADOR QUINCHUA DUQUE y CARLOS ENRIQUE RESTREPO BUSTAMANTE y con destino a COLPENSIONES EICE respecto de los Sres. Patiño Correa y Quinchia Duque, COLFONDOS S.A. con relación a los Sres.

Betancur López y Restrepo Bustamante y PORVENIR S.A. frente al Sr. Restrepo Areiza, título pensional por el periodo comprendido entre el 1° de julio de 1995 y el 30 de marzo de 2017, salvo frente al Sr. Eduin Hernando Restrepo Areiza cuyo hito inicial se fija en el 28 de enero de 1998, teniendo en cuenta para ello como salario base el señalado en sentencia dictada por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín el 16 de junio de 2017 bajo concepto 3°, sin que se incluyan ciclos en los cuales les figuren aportes durante dicho periodo por parte del ente territorial, ante la imposibilidad de ordenar el pago doble de un mismo concepto”, igualmente se CONFIRMARÁ la decisión, teniendo en cuenta que los señores Luis Carlos Betancur López, Fabio Ignacio Patiño Correa, Eduin Hernando Restrepo Areiza y Manuel Salvador Quinchía Duque laboraron hasta el 19 de diciembre de 2001, y el Sr. Carlos Enrique Restrepo Bustamante laboró hasta el 31 de marzo de 2002, ello es, con posterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993, oportunidad en que el empleador Municipio de Tarazá, debió realizar la afiliación y el pago de los aportes pensionales sin que lo haya hecho.

Adicionalmente, respecto a los aportes pensionales por el periodo comprendido entre el 19 de diciembre de 2001 y 31 de marzo de 2002 (terminación del contrato de los demandantes) y hasta el 30 de marzo de 2017, igualmente existe la obligación de que sean reconocidos por el Municipio de Tarazá bajo la existencia de la sentencia emitida por el Tribunal Superior de Medellín Sala de Justicia y Paz el 16 de junio de 2017 en donde en forma expresa determinó la existencia de un **despido** por parte del Municipio de Tarazá. En el aparte que nos interesa señaló:

*“Las anteriores solicitudes se resolverán de acuerdo a las situaciones particulares de cada una de las víctimas bajo la siguiente metodología: Se procedió a liquidar los salarios y prestaciones sociales a que tenían derecho según la convención colectiva como son las Primas de junio y diciembre, Prima de Vida Cara, Prima de Antigüedad, Vacaciones, Prima de Vacaciones, Cesantías e Intereses a las Cesantías que dejaron de percibir los trabajadores que estaban afiliados a SINTRAOFAN **como consecuencia del despido que fueron objeto por parte del municipio de Tarazá**, la liquidación se realizó desde el momento del despido hasta marzo de 2017 (...)*”

Finalmente, frente a la condena en costas impuesta al Municipio de Tarazá, se confirmará, con base en lo señalado en el art. 365 del CGP que expresa: “1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso...”, y en este evento, las pretensiones de la demanda fueron reconocidas a la parte accionante.

Por las razones expresadas, considera la Sala que lo legal y pertinente será **CONFIRMAR** en todas sus partes la sentencia emitida en primera instancia.

Sin costas en esta instancia por ser conocida en el grado jurisdiccional de consulta.

En mérito de lo expuesto, y administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, el TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, EN SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL,

RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR en todas sus partes, la sentencia de primera instancia emitida por el Juzgado Diecinueve Laboral del Circuito de Medellín, de conformidad con los argumentos presentados en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Sin costas en esta instancia por conocerse en consulta.

TERCERO: Las anteriores decisiones se notifican por EDICTO, conforme lo dispuesto en la providencia AL 2550, radicación 89628 del 23 de junio de 2021 de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia.

Los magistrados



HUGO ALEXANDER BEDOYA DÍAZ



GUILLERMO CARDONA MARTÍNEZ



CARMEN HELENA CASTAÑO CARDONA



SECRETARÍA SALA LABORAL
EDICTO VIRTUAL

La secretaría de la Sala laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín notifica a las partes la sentencia que a continuación se relaciona:

DEMANDANTES	: LUIS CARLOS BETANCUR LÓPEZ, FABIO IGNACIO PATIÑO CORREA, EDUIN HERNANDO RESTREPO AREIZA, MANUEL SALVADOR QUINCHÍA DUQUE y CARLOS ENRIQUE RESTREPO BUSTAMANTE
DEMANDADOS	: MUNICIPIO DE TARAZÁ y COLPENSIONES
LITISCONSORCIO NECESARIO:	ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS COLFONDOS S.A. Y PORVENIR S.A.
TIPO DE PROCESO	: ORDINARIO
RADICADO NACIONAL	: 05-001-31-05-019-2019-00565-01
RADICADO INTERNO	: 296-22
DECISIÓN	: CONFIRMA SENTENCIA
ACTA NÚMERO	: 006

Magistrado Ponente
HUGO ALEXANDER BEDOYA DÍAZ

El presente edicto se fija en la página web institucional de la Rama Judicial <https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/148> por el término de un (01) día hábil. La notificación se entenderá surtida al vencimiento del término de fijación del edicto.

CONSTANCIA DE FIJACIÓN

Fijado el 01 de febrero de 2023 a las 8:00am

CONSTANCIA DE DESFIJACIÓN

Se desfija el 01 de febrero de 2023 a la 5:00pm

RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS

SECRETARIO